



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

EXPTE: 21120/2024

“REMACAP S.R.L. c/AFIP-DIRECCION GENERAL DE LA SEGURIDAD s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excm. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto en el siguiente orden:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

La empresa REMACAP S.R.L. impugna la Resolución N° 1224 del 18 de enero de 2024 de AFIP, que al confirmar una anterior, reclama una deuda por omisión de aportes y contribuciones a la seguridad social por personal no declarado al constatarse un incumplimiento al debido registro de alta de trabajadores relevados, suspendiendo la aplicación de una multa (art. 5° segundo párrafo de la RG 1566) hasta tanto se dicte pronunciamiento en sede penal conforme lo previsto por el art. 20 del Régimen Penal Tributario.

Concretamente la impugnante expresa que la resolución atacada carece de razonabilidad pues no se expide sobre el caso concreto ni sobre los hechos denunciados, dado que los trabajadores relevados no son empleados suyos bajo relación de dependencia sino que se trata de agentes inmobiliarios, todos ellos que se desempeñan en forma autónoma e independiente, con quienes se encuentra vinculado en el marco de contratos de franquicia, por lo que las actas de inspección e infracción devienen nulas por falta de motivación.

También argumenta que la AFIP carece de competencia para actuar como lo hizo, toda vez que incumbe al Ministerio de Trabajo el cumplimiento de tal tarea. Sostiene que el organismo actuante prescinde de manera arbitraria de la prueba ofrecida y producida aplicando en su contra la presunción de existencia de relación de trabajo subordinada sin analizar la instrumentación jurídica elegida por las partes, con base en lo prescripto por los arts. 1479 y sgtes del Cód. Civil y Ccial de la Nación. También expresa que se omitió considerar distintas resoluciones del Ministerio de Trabajo que, en casos que presentan analogía, decidió en forma favorable a los intereses del franquiciante. Argumenta asimismo que no hay reclamos laborales de parte de los agentes, lo que demuestra en su opinión la inexistencia de una pretendida relación de trabajo subordinada.

Concluye afirmando que la única relación que existe con las personas inspeccionadas es a través de contratos de agencia.

El organismo interviniente rechaza el planteo impugnatorio.

Fecha de firma: 13/06/2025

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JOSE MARIA SANCHEZ MOSCOSO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#39168457#440450861#20250605091839921

En primer lugar, sostiene que la apelación presentada no constituye una verdadera expresión de agravios en los términos del art. 265 del CPCCN pues en autos no se hace otra cosa que manifestar su disconformidad con la deuda determinada.

Subsidiariamente contesta el traslado conferido, afirmando que el acto administrativo atacado no es infundado ni carece de motivación, que las actas de relevamiento y comprobación son instrumentos públicos y que como tales poseen fuerza probatoria, que el apelante pretende desconocer sus efectos olvidando que la infracción cometida lesiona normativa vigente en materia de seguridad social, que es de orden público ya que no solo afecta a los trabajadores involucrados sino también al conjunto de los ciudadanos. Solicita se rechace el recurso interpuesto en cuanto sostiene la inexistencia de relación de dependencia habida entre la inspeccionada y los denominados agentes

Si bien el impugnante no efectuó el depósito exigido por el artículo 15 de la ley 18.820 acompañó un seguro de caución por \$26.413.646,81 emitida por Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. por lo que corresponde habilitar la vía de revisión judicial.

En cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento, no se advierte que asista razón al recurrente.

En el caso, los inspectores actuantes ejercieron su potestad de fiscalización y , a lo largo del proceso, la apelante intentó demostrar que las personas relevadas no son sus dependientes, sin embargo la lectura de las actuaciones no revela que lo actuado en sede administrativa resulte violatorio del art. 7º de la ley 19.549.

Ello por cuanto en un estado de derecho resulta indiscutible que el Poder Administrador puede ejercitar funciones de control y fiscalización sobre la actividad productiva con el fin de verificar el cumplimiento de las normas vigentes.

Se ha señalado, al respecto, que las facultades de la policía del trabajo no se reducen a la actividad de comprobación, sino que son más amplias, comprendiendo acciones de prevención, de investigación y de aplicación de sanciones (Pirolo, Miguel A. “Derecho del Trabajo Comentado”, Tº IV pág. 846 edit. La Ley; Vázquez Vialard, Antonio, “Naturaleza y caracteres de la función que desarrolla la Administración Laboral” LT Tº XX pág. 957/965).

En el caso, los inspectores respetaron las normas reglamentarias labrando el acta correspondiente a tenor de lo establecido por el art. 3º de la ley 18.695.

Dicho acto goza de presunción de legitimidad en los términos del art. 12 de la ley 19.549 (mod. por la ley 27742) y, como ya expresara, a lo largo del proceso administrativo la sumariada intentó desvirtuar su eficacia, por lo que no se advierte violentado el debido proceso legal o que nos encontremos frente a un acto administrativo viciado.

El tema central aquí es establecer si la prueba producida permite concluir que, tal como afirma la recurrente, las personas relevadas al momento de la inspección pueden o no ser





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

consideradas como trabajadores dependientes por haber celebrado un contrato de agencia en los términos del art. 1479 del Cód. Civ. y Ccial de la Nación.

Cabe recordar que el legislador conceptualiza el contrato de agencia como aquél por el cual una persona se obliga a promover negocios por cuenta de otra, denominada proponente o empresario, de manera estable continuada e independiente mediante una retribución, considerando que el agente es un intermediario independiente pues no asume el riesgo de la operación, ni representa al pre-oponente y, en el caso, todas las personas físicas emplazadas celebraron contrato escrito con REMACAP S.R.L.

De los términos de dicho contrato surge que la apelante es una entidad que goza de un contrato de franquicia para explotar la marca RE/MAX Argentina SRL y, a tal fin, capacita a personas físicas que se presentan como agentes inmobiliarios, los que acuerdan realizar, durante determinado lapso, operaciones de venta y alquiler de inmuebles obteniendo autorizaciones y reservas de sus propietarios las que quedan en poder de la apelante como de propiedad exclusiva teniendo -como contrapartida- derecho al uso de sus instalaciones y al cobro en un porcentual de honorarios de toda las operaciones que se realicen siguiendo los contratos modelos utilizados en el sistema RE/MAX.

Ahora bien, el contrato de agencia vincula a una parte que, en el lenguaje comercial, es llamada comitente, a quien la otra solicita se encargue de la venta de sus productos y por ello resultan elementos tipificantes del contrato de agencia: a) la calidad de promotor de negocios que caracteriza al agente comercial, tenga o no facultades representativas del fabricante que lo ha contratado, b) la autonomía o independencia con que el agente desarrolla su actividad, entendida como ausencia de subordinación a las órdenes del comitente, c) la unilateralidad de la gestión del agente realizada en beneficio del comitente, d) el carácter estable del vínculo y e) la asignación de una zona geográfica donde se ejercerá la labor comercial.

No puede desconocerse, dentro de nuestra realidad económica, que la figura referida es utilizada, en forma abusiva, para enmascarar relaciones netamente laborales que, desde un punto de vista ideal, pueden encontrarse tuteladas por el estatuto de viajantes de comercio (ley 14.546) o directamente, por la legislación madre, es decir la L.C.T. (ley 20.744 t.o.1976) y es por ello que, desde el punto de vista práctico resulta dificultoso diferenciar externamente las prestaciones realizadas por un agente comercial de aquellas que responden a un trabajador dependiente.

Sin perjuicio de lo anterior cabe tener presente que el contrato de agencia vincula, por regla, a comerciantes o empresarios y, por ende, si el agente es dueño o dirige su propia organización productiva necesitará de terceros para cumplir su compromiso, o bien cuenta con un establecimiento, no existiendo en estos casos la posibilidad que la relación sea tipificada como labo-



ral ya que éstos últimos constituyen factores que excluyen tal figura, pero ello no sucede en el caso a estudio.

En efecto, conforme el principio de primacía de la realidad y a la luz de lo dispuesto por el art. 21 de la LCT, en autos se configura una relación de trabajo por cuanto personas físicas se obligan a captar clientela para la accionada que, alquila o vende en sus propias condiciones inmuebles, compensando la capacidad laborativa de dichas personas -tiempo libre y fuerza intelectual- mediante comisiones sin que se advierta cuál es la autonomía de que gozan ya que deben prestar servicios integrando el plantel de quienes a través del sistema “RE/MAX” capta clientela.

Tal como ya se expresara, el contrato de agencia presupone la existencia de cierta independencia en el agente para realizar la actividad encomendada y gozar de las características propias de un emprendedor -ser titular de una organización productiva propia con oficinas, nombre comercial, auxiliares administrativos, etc.- y, en el caso, los agentes involucrados carecen de instalaciones propias, resultando, a tenor del contrato suscripto, garantes ilimitados de las obligaciones asumidas por sus clientes (ver art. 5º, inc. c, del contrato suscripto) lo que resulta violatorio de lo dispuesto por el art. 1482 del Cód. Civ. y Ccial de la Nación pues dichos agentes sólo pueden ser garantes hasta el importe de la comisión que han de percibir de los empresarios.

Cabe observar que la apelante goza de una franquicia, entrena a personas físicas para explotarla y, luego los incorpora como auxiliares de su esquema de negocio a fin que puedan intermediar en la actividad inmobiliaria que constituye su objetivo social -venta o alquiler de inmuebles- fijando las condiciones de transacción y recompensando a sus operarios con comisiones y con el uso funcional de sus oficinas.

No deja de llamar la atención, que si quienes adquieren o alquilan una propiedad son clientes exclusivos de los agentes inmobiliarios sin ningún vínculo con REMACAP SRL, como sostiene la apelante, resultando significativo que dichos agentes inmobiliarios utilicen los sistemas informáticos de la red de publicaciones de la empresa, usen sus instalaciones, completen operaciones de venta o alquiler, sin responder a ninguna autoridad ni directiva al respecto.

Mas aun si se tiene presente que es la estructura empresarial mencionada la que posiblemente atrajo a los clientes, concertándose operaciones comerciales que generan ganancias para la empresa.

De alguna forma el utilizar publicidad, panfletería y las oficinas de REMACAP SRL avala las operaciones inmobiliarias concertadas por el personal que medió en la transacción.



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Por otra parte, la discusión no solo se centra en la existencia de una relación de dependencia con la impugnante, sino que cabe preguntarse si esa relación podría ser obviada en el marco de una “franquicia” de esta naturaleza.

Con base en lo anterior, la subordinación jurídica, bajo el formato referido, se encuentra tipificada pues los contratos celebrados con la clientela deben responder a las pautas del sistema de “RE/MAX” y el hecho que los interesados no cumplan un horario de trabajo es explicable dada la naturaleza de la actividad, es decir la captación de clientela en el ámbito urbano y no la venta de productos en un establecimiento, por lo que en este aspecto lo decidido en la instancia administrativa deviene ajustado a derecho.

El sentido de este voto viene a coincidir con lo expresado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en cuanto a que

Con respecto al agravio dirigido contra los intereses aplicados, dado que en el caso que nos ocupa se considera acreditada la existencia de deuda previsional los intereses resultan consecuencia lógica del incumplimiento incurrido (art. 767 del Cód. Civ. y Ccial de la Nación).

Por último, y con respecto a la multa, la sola constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción de infractor por lo que también en este aspecto corresponde el rechazo de la queja vertida.

La naturaleza de la cuestión sometida a juzgamiento me lleva a proponer que las costas sean impuestas en el orden causado (art. 68 2do. párrafo CPCCN).

En virtud de todo lo expresado propongo: 1º) Declarar habilitada la presente instancia judicial, 2º) Confirmar la resolución recurrida, 3º) Imponer las costas en el orden causado atento la peculiaridad que presenta la cuestión en debate (art. 68 2do. párrafo del CPCCN).

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Adhiero al voto de la Dra. Dorado en cuanto a la habilitación de la presente instancia, disiento en cuanto a la solución propuesta.

Ahora bien, conforme se desprende de la resolución atacada, la administración luego de analizar la prueba acompañada por la recurrente, concluyó que de la valoración de la prueba y los agravios alegados por la contribuyente no logran desvirtuar los hechos que se encuentran comprobados en el trámite de las actuaciones administrativas, no logrando eximir de responsabilidad a la empresa REMACAP S.R.L., toda vez que el acta de comprobación no ha sido desvirtuada por lo que considero que correspondía imponer la multa aquí cuestionada.

La empresa en su expresión de agravios, refiere a la nulidad del acto administrativo, afirmando que la administración no realizó una valoración de la prueba que pudiera llevar a la una resolución de la contienda en forma conducente. En este orden de ideas, sostiene que la prueba acompañada resulta suficiente para confirmar la falta de dependencia laboral de los



diferentes agentes entrevistados. Cita diferentes antecedentes resueltos en sede administrativa de similares características a la acción de marras y normativa aplicable al caso, para demostrar que organismo fiscal ha incurrido en un error.

Seguido a ello se agravia en cuanto el fisco ha presumido la relación de dependencia en los términos de la ley de contratos de trabajo, entre la empresa y los agentes inmobiliarios. Sostiene que la presunción en cuestión admite prueba en contrario y describe las características del funcionamiento de las franquicias y de los contratos de agencia. Destaca la independencia de los agentes inmobiliarios, conforme lo expuesto en el Expte. N° 7-51-124492-2017, Resolución N° 59525/2017 (del 6/12/2017) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en la cual se deja sentado que los agentes inmobiliarios no están sujetos a una relación de dependencia laboral. Describe, de igual manera, una serie de características propias de la relación que mantiene la empresa con los agentes inmobiliarios. Realiza citas legales y de jurisprudencia en favor de su posición.

Entiendo que asiste razón a la recurrente en atención a que no encuentro suficientemente acreditadas las notas tipificantes de una relación laboral, robustece esta premisa la falta de un detallado análisis de la prueba documental acompañada en el expte digital -Expte. Nro. EX-2021-00459417- -AFIP-OCOFAGM051#SDGOPIM-, entre la que se advierte: Contratos de agencia suscriptos por los sujetos relevados y la empresa REMACAP S.R.L. cartas de oferta, facturas electrónicas emitidas por los presuntos trabajadores a la empresa REMACAP S.R.L.

Asimismo, no es un dato menor que el propio ministerio en otros supuesto de artistas similares con la misma empresa ha considerado que: "...teniendo en consideración las manifestaciones vertidas por la recurrente, los datos vertidos por las personas afectadas, la prueba documental aportada y las verificaciones efectuadas surgen dudas del vínculo dependiente entre las partes por lo que corresponde revocar la resolución en crisis y absolverla de la multa impuesta..." (Ver RESOL-2022- I 6955-APN-DRLF#MT).

"...Que...teniendo en cuenta las consideraciones vertidas en defensa de la imputada, las constancias de autos, la prueba documental arimada...se genera en esta autoridad de aplicación un razonable margen de dudas como para imponer sanción, razón por la cual también se absuelve a la requerida de la multa que le correspondería por infracción a la Ley No 11.683..." (Ver RESOLUCIÓN D.R.F. No: 58100/2017).

"...que de las constancias de autos surgen razonables dudas respecto del carácter dependiente de la prestación de servicios constatada. Que si bien el artículo 23 de la ley 20.744 (Texto ordenado por decreto n° 390/76 y sus modificatorias) pone en cabeza del empleador el acreditar la inexistencia de vínculo laboral cuando, como en el caso de autos, se encuentra constatada la prestación de servicios, esta Autoridad entiende que estaba acreditado los agentes llevan a cabo a la organización empresarial a su propio riesgo, cabe tener por desvirtuada dicha





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

presunción legal, en cuento de tal circunstancia puede inferirse el carácter comercial del vínculo . Que por ello, se absuelve de la multa que correspondería toda vez que se ha logrado desvirtuar el contenido del acta de comprobación.) (Ver Resolución DRF n°59525/2017).

La declaración de la recurrente y documental acompañada que acreditaría la existencia de un vínculo comercial entre la empresa REMACAP S.R.L. y las personas relevadas, ameritaban la necesidad de una mayor investigación a ésta, lo que me lleva a sostener que el organismo no ha agotado el procedimiento para dilucidar la cuestión.

La presunción debe ser el punto de partida de un procedimiento de investigación exhaustivo, donde todas las pruebas necesarias para su comprobación se lleven a cabo. Resulta oportuno poner de manifiesto que existiendo hechos y pruebas contradictorias, el fisco no debió quedarse con los datos vertidos en el acta sino que por el contrario, en virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, la autoridad administrativa debió dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea conducente para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada, máxime cuando se denunciaron modalidades contractuales como el contrato de agencia, expresamente prevista en el Código Civil y Comercial desde el año 2015 en su artículo 1479 y siguientes.

Por lo tanto, será pura y exclusivamente una cuestión de hecho y prueba demostrar que los agentes involucrados, son en realidad trabajadores. Supuesto de extrema gravedad que requiere de parte de quien efectúa tal imputación el máximo de prudencia.

Tener una visión completa de la situación hubiera exigido de parte de la administración, el exhaustivo análisis de la documental acompañada, a modo de constatar cuál era el verdadero vínculo entre los sujetos involucrados, como parte de un -presunto- contrato de agencia y prestación de servicios.

En este sentido, no se trata de cumplir con un ritualismo procedimental, sino de satisfacer el orden público para arribar a la verdad material, mediante el aseguramiento del derecho de defensa del interesado. Aunque el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte, la impulsión de éste corresponde a la administración, en razón de que con él no tiende a satisfacer simplemente un interés individual, sino un interés público: el administrativo (ver Hutchinson, Tomás; " Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549 ", pág. 29 y ss.).

Por consiguiente, propicio se declare la nulidad del procedimiento incoado y de las resoluciones dictadas en su consecuencia.

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Que, en las particulares circunstancias de la causa, adhiero al voto que precede.

Fecha de firma: 13/06/2025

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JOSE MARIA SANCHEZ MOSCOSO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#39168457#440450861#20250605091839921

En mérito de lo que resulta del acuerdo de la mayoría, el Tribunal **RESUELVE:** 1º) Hacer lugar a la habilitación de la instancia judicial, 2º) Declarar la nulidad del procedimiento incoado y, de las resoluciones dictadas en su consecuencia, 3º) Imponer las costas en el orden causado, atento la naturaleza de la cuestión debatida y las particularidades de la causa. (art. 68 2do. párrafo CPCCN). Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

Ante mí: JOSE MARIA SANCHEZ MOSCOSO
Prosecretario de Cámara

